



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-013-2017-00643-01
Demandante:	Rosa Elena Forero de Mayor
Demandado:	Protección S.A.
Interviniente ad excludendum:	Viviana Alexandra Mayor Rodríguez
Litisconsorte necesario:	Positiva S.A.
Asunto:	Apelación sentencia
Procedencia:	Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Pensión de sobrevivientes, dependencia madre

Medellín, julio veintidós (22) de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, el 20 de abril de 2022, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por la señora ROSA ELENA FORERO DE MAYOR en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y

CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., proceso al cual fue citada como litisconsorte necesario por pasiva POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y como interviniente ad excludendum la joven VIVIANA ALEXANDRA MAYOR RODRÍGUEZ, Radicado 05001-31-05-013-2017-00643-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

La señora ROSA ELENA FORERO DE MAYOR convocó a juicio a PROTECCIÓN S.A., pretendiendo se declare que tiene derecho a la pensión de sobrevivientes y las prestaciones subsidiarias derivadas del fallecimiento de su hijo Oliver Mayor Forero, condenando a la demandada a reconocerle las mesadas pensionales de sobrevivencia con los intereses moratorios.

En respaldo de tales pedimentos, se expuso que la actora es madre de Oliver Mayor Forero, quien laboró y cotizó como dependiente, desempeñándose como funcionario público por más de 20 años, velando siempre por la subsistencia de sus padres, aporte que incrementó cuando falleció su padre, pasando a responder por las necesidades básicas de su señora madre, que el afiliado murió el 17 de mayo del 2014.

Se explica que la accionante solicitó la pensión de sobrevivientes, la que le fue negada por la entidad sin justificación alguna, pese a que acredita los requisitos para acceder a la misma, aunado a que su hijo dejó reunidos los requisitos para acceder a la prestación.

1.2.- CONTESTACIÓN

PROTECCIÓN S.A. dio respuesta a la demanda, indicando que la actora no ha efectuado una reclamación de la prestación hoy pretendida, allegando la documentación necesaria, por lo que la administradora no ha tenido la

oportunidad de investigar las situaciones que se alegan en los hechos de la demanda, correspondiéndole a la accionante acreditar que dependía económicamente de su hijo fallecido.

A su vez, propuso las excepciones que denominó: no existe reclamación previa ante Protección S.A. de la pensión de sobrevivientes; petición antes de tiempo; falta de causa para pedir; inexistencia de las obligaciones demandadas; buena fe y prescripción.

Por su parte, **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**, quien fue citada al proceso como litisconsorte necesario por pasiva, dio respuesta a la demanda, exponiendo que recibió reclamación administrativa de parte de la actora, por lo que adelantó investigación, constatándose que la hoy reclamante es propietaria de dos predios rurales dedicados a actividades productivas, que vive además con otro hijo que colabora con los gastos del hogar, que recibe ayudas estatales a través del programa de familias en acción y que a pesar de mencionar que por cuenta del causante recibía apoyo recurrente a través de giros realizados a través de Servientrega, no entregó ni un comprobante que acreditara dicha afirmación.

En su defensa formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva; inexistencia material del derecho a la eventual sustitución por inexistencia de prueba de la dependencia económica; prescripción; buena fe de la entidad demandada.

La joven VIVIANA ALEXANDRA MAYOR RODRÍGUEZ, hija del causante y quien fue citada como interviniente ad excludendum, no compareció al proceso, razón por la cual fue emplazada y notificada a través de curador ad litem.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

Mediante fallo proferido el 20 de abril de 2022, el Juzgado de conocimiento absolvió a Positiva S.A. y a Protección S.A. de todas las pretensiones incoadas en su contra por la actora, condenando a ésta en costas.

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

Demandante

La apoderada de la actora presentó recurso de apelación, señalando que se demostró que el causante le enviaba dinero a su madre y así lo hacía su hermano Diego, aunque en menor cantidad; asimismo para la fecha en la que se efectuó la reclamación, la hija del afiliado era mayor de edad, por lo que debían ayudarle a la madre, quien ya había perdido a su esposo y estaba sola en la finca con su hijo Oscar, quien tiene deficiencias mentales y que como puede administra la finca.

Expresó que la contingencia padecida por el causante, fue laboral, por lo que la ARL Positiva debe responder por las pretensiones de la demanda.

Agregó que la demandante es una persona muy mayor y debe tener un auxilio económico por parte de la ARL, considerando que el hecho que la actora tenga una finca de cuatro hectáreas, no la hace autosuficiente, por cuanto el campo pasa por innumerables dificultades, agregando que la hija del causante ya no necesita ayuda económica al ser mayor de edad y tener un hijo, mientras que la demandante si la necesita.

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunciaron los apoderados de la demandante y de las demandadas. El apoderado de la actora, solicitó se revocara la sentencia de primera instancia, argumentando que la demandante dependía económicamente de su hijo, quien le proveía lo

necesario para subsistir en condiciones dignas, siendo la misma una persona de avanzada edad, que carece de los recursos económicos para atender sus necesidades básicas, dando fe de ello, las testigos arrimadas al plenario.

Por su parte, la apoderada de Protección S.A. indicó que se probó que la génesis del deceso del afiliado, fue de índole laboral, lo que descartaría la competencia de la administradora, para el reconocimiento prestacional, sin cumplir la parte demandante con la carga de probar la dependencia económica.

Finalmente, el apoderado de Positiva S.A. solicitó se confirmara la providencia de primera instancia, por cuanto la actora no acredita los requisitos para tener derecho a la prestación solicitada, ya que no probó la dependencia, acreditándose que con los ingresos que percibe, la misma es autosuficiente económicamente.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que el señor Oliver Mayor Forero, quien nació el 23 de marzo de 1972, era hijo de los señores Rosa Elena Forero y Luis Felipe Mayor Ocampo, conforme al registro civil de nacimiento. Se constata notas marginales en dicho documento, que dan cuenta de matrimonio católico celebrado el 24 de diciembre de 1996, cesación de efectos civiles del matrimonio católico según sentencia No. 454 del 30 de septiembre del 2005 del Juzgado Décimo Primero de Familia de Medellín y liquidación de sociedad conyugal según escritura No. 2221 de septiembre del 2005, obrante en el documento *01 Expediente.pdf folio 13* del plenario.

- Que el señor Oliver Mayor Forero, falleció el 19 de octubre del 2014, tal y como informa la copia del registro civil de defunción visible en el documento *01 Expediente.pdf folio 15* del plenario.

- Que la muerte del afiliado se dio por causa o con ocasión de su trabajo, tal y como se desprende del formato de informe para accidente de trabajo, que fue aportado por la parte accionante, en donde se da cuenta de accidente acaecido el 19 de octubre del 2014, en la empresa Inversionistas Unidos y Rentas de Capital S.A.S., ubicada en el municipio de Envigado, evento acaecido en la jornada de trabajo, narrándose que el afiliado estaba escoltando al jefe y al recibir la orden de cerrar la empresa, recibe 3 impactos de bala en la espalda, generándole la muerte –ver documento *01 Expediente.pdf folio 132* del plenario-.

- Que el causante cotizó 131.71 semanas, tal como se desprende de la historia laboral emitida por Protección S.A. el 9 de febrero del 2018, militante en el documento *01 Expediente.pdf folios 73 a 74* del plenario.

- Que la señora Rosa Elena Forero de Mayor, solicitó el 18 de abril del 2017 a Protección S.A., el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia, recibiendo respuesta el día 9 de marzo del 2016, en la cual la administradora le indica que para el reconocimiento de las prestaciones económicas, debe existir una solicitud formal de pensión, requiriéndola para que se presente a una oficina

de la entidad, a recibir información sobre la documentación que debe presentar –ver documento *01 Expediente.pdf folios 91 a 98* del plenario-.

- Que el causante tuvo una hija llamada Viviana Alexandra Mayor Rodríguez, quien nació el 16 de julio de 1996 —ver documento *18 Memorial.pdf folio 5* del plenario-.

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si debe revocarse la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, estableciendo para el efecto si la señora ROSA ELENA FORERO DE MAYOR, acredita la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivencia de origen profesional causada con ocasión del fallecimiento de su hijo, Oliver Mayor Forero, ocurrido el 19 de octubre del 2014?

2.4.- TESIS

El problema jurídico planteado se resuelve bajo la tesis según la cual, no se acredita la dependencia económica de la accionante respecto de su hijo fallecido Oliver Mayor Forero, y, por lo tanto, la demandante no es beneficiaria de la prestación de sobrevivencia. En consecuencia, la sentencia debe ser CONFIRMADA.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

No se discute en esta Litis el origen profesional del evento en el cual perdió la vida el señor Oliver Mayor Forero, ocurrido el 19 de octubre de 2014, de manera que la prestación solicitada se encuentra bajo la esfera del sistema de riesgos laborales.

El artículo 11 de la Ley 776 de 2002, establece:

“ARTÍCULO 11. MUERTE DEL AFILIADO O DEL PENSIONADO POR RIESGOS PROFESIONALES. Si como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional sobreviene la muerte del afiliado, o muere un pensionado por riesgos profesionales, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y su reglamentario.”

Conforme a la anterior preceptiva, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, respecto a los beneficiarios de la prestación, que, en lo que interesa al proceso, establece:

“ARTÍCULO 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así:

Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

(...)

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este.”

En el caso que concita la atención de la Sala, el punto central de discusión radica en determinar si la demandante, tiene o no la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivencia de origen profesional, en relación con el requisito de dependencia económica.

Parte la Sala de la premisa jurídica, que la dependencia económica, como lo determinó la Corte Constitucional en la sentencia C111 de 2006 y lo ha reiterado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en innumerables fallos, no requiere ser absoluta, véase al respecto las sentencias CSJ SL400 de 2013, SL816 de 2013, SL 2800 de 2014, SL3630 de 2014, SL6690 de 2014, SL14923 de 2014 y SL6390 de 2016, sin que ello signifique, que no sea necesario que exista una relación de sujeción de los padres en relación con la

ayuda pecuniaria del hijo, de manera que si bien pueden percibir ingresos adicionales, estos deberán ser insuficientes para garantizar la independencia económica.

En sentencia SL 10251 de 2017, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, recordó que el aporte del causante debe ser de una entidad considerable para configurar dependencia:

“En relación con la acusación presentada en el segundo cargo orientado por la vía directa, en cuanto a la interpretación errónea del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en punto al entendimiento que debe darse al requisito de dependencia económica, puede verificarse que la sentencia de segundo grado, admitió que no se exige que la dependencia sea total y absoluta, sino que tenga la connotación de subordinación respecto de otra persona o la necesidad de auxilio o protección de otra”

“Intelección que atiende los planteamientos que sobre este asunto ha sostenido esta Corporación, pues ha sido criterio reiterado, que la dependencia económica se establece en cada caso particular, sin que la misma sea total y absoluta, pues lo que ha de probar es que se derive de una contribución por parte del causante, que se acredite como relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento del demandante, y que pueda configurar subordinación económica que se requiere para adquirir la condición.”

La anterior postura jurídica se itera en sentencia de la misma corporación, SL1243-2019 (68336) del 27 de marzo del 2019, en la que se enfatiza que la dependencia económica no puede comprenderse en términos absolutos, de modo que el hecho de que existan otras contribuciones o rentas en favor de los padres del afiliado fallecido, no excluye su derecho a obtener una pensión de sobrevivientes, pero tampoco puede entenderse que la mera presencia de un auxilio o ayuda monetaria del “buen hijo”, siempre sea indicativo de una verdadera dependencia económica:

“Puesto en otros términos, no significa que es cualquier estipendio, ayuda o colaboración que se otorgue a los progenitores, el que tiene la virtualidad de configurar la subordinación económica que se requiere para adquirir la condición

de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, sino aquel que tiene la connotación de ser relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento de la familia, en tanto la finalidad prevista por el legislador para obtener la referida prestación, es la de servir de amparo a quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba, realmente, a mantener unas condiciones de vida determinadas (CSJ SL18517-2017).

Es por lo anterior, que se ha puntualizado jurisprudencialmente que la mera presencia de un auxilio o ayuda monetaria del «buen hijo», no siempre es indicativo de una verdadera dependencia económica y, en esta eventualidad, no se cumplirían las previsiones señaladas en la ley...”

2.6.- CASO CONCRETO

La dependencia económica de los padres respecto de los hijos, como lo ha establecido la Corte Constitucional y la Sala Laboral de Corte Suprema de Justicia, debe ser auscultada en cada caso concreto, sin que existan reglas de comprobación general. Igualmente, es un concepto que está vinculado al mínimo vital cualitativo de los padres, de manera que el aporte del hijo, sea determinante para mantener el mismo, con independencia del quantum de los ingresos propios o suministrados por terceros.

Con la finalidad de acreditar la calidad de beneficiaria de la prestación, la parte demandante presentó como testigos a las señoras CARMEN ROSA CLAVIJO CORREA y OLGA LUCÍA AMORTEGUI, residentes en el Municipio de Roldanillo Valle, en el cual reside igualmente la demandante, quienes estudiaron con los hijos de la actora y coincidieron en indicar que el señor Oliver Mayor Forero vivía en Envigado Antioquia y lo mataron cuando estaba laborando, así como que el mismo era pensionado de la Policía.

Sobre la dependencia de la demandante respecto de su hijo fallecido, afirmó la señora Carmen Rosa Clavijo Correa, que la demandante siempre ha dependido de sus hijos Oliver y Diego, mientras que Olga Lucía Amortegui, dio cuenta que era Oliver Mayor Forero, el encargado del sostenimiento de su madre, hoy

reclamante, esta misma testigo indica que era como una hermana del causante, no obstante, desconoce en qué laboraba el mismo, hacía cuanto tiempo se había ido a vivir a Medellín, así como, si el afiliado respondía o no por su hija, lo cual desvirtúa la cercanía aducida.

Ambas deponentes expresaron que Oliver Mayor Forero le llevaba el dinero a su madre y la visitaba frecuentemente, desconociendo cuánto dinero le daba, explicando que cada 20 días o cada mes, iban los hijos de la actora a visitarla, es decir, Diego y el causante, pasando también a visitarlas, oportunidad en la cual les decían que llevaban el dinero para darle a su madre, siendo claro que nunca presenciaron la entrega del aporte que se indica suministraba el afiliado.

De otra parte, la demandante intentó rendir su interrogatorio, en forma presencial en el Despacho, sin embargo, la misma se observó confundida en sus respuestas, al punto de no saber que se encontraba en Medellín rindiendo su declaración, asegurando que encontraba en la ciudad de Roldanillo, lo que llevó a que la señora Juez a declarar que se encontraba inhabilitada para rendir su interrogatorio. Sin embargo, la misma alcanzó a indicar que sembraba yuca, caña, arracacha, frijol, maíz y café, que eso no le aportaba mucho, pero le daba para comer.

De ahí que la prueba testimonial no permite establecer a cuanto ascendía el aporte que era suministrado por el causante a su madre, quedando en evidencia que la gestora del proceso, también recibía ayuda de su otro hijo Diego, sin que sea posible entrar a determinar en qué porcentaje le aportaba cada uno, a efectos de verificar si el aporte del causante, era de una entidad suficiente para configurar la dependencia económica.

En ilación a lo anterior, en la investigación administrativa realizada por la firma Análisis de Riesgos Aries S.A.S., fechada el 5 de julio del 2017, se acreditó que la demandante vivía en casa propia, siendo propietaria de dos bienes inmuebles en el municipio de residencia, denominados la Aurora y el Jazmín, conforme a

los documentos aportados en la investigación administrativa, véase *documento 11. Contestación Positiva pdf, folios 61 a 64*, desconociéndose la destinación del segundo inmueble.

También se constató en la referida investigación otros hechos, como que el causante tuvo una hija llamada Viviana Alexandra Mayor Rodríguez, a quien no fue posible ubicar, que el mismo vivía con su hermano Diego Adolfo Mayor Forero en Envigado, quien trabaja hacía 17 años en Enviaseo, como supervisor y quien en entrevista telefónica, adujo que le aportaba \$200.000 a su madre, pero que quien más aportaba, era su hermano fallecido, que le enviaba \$400.000 mensuales, aclarando que su hermano además tenía la obligación de su hija, que vivía con ellos en Envigado, joven que estaba terminando la secundaria para la fecha de la muerte de su padre, afirmando que se pasaron de apartamento y ella se fue con la mamá y no la volvió a ver.

Se expresó en el mismo reporte, que el tercer hijo de la demandante señor Oscar Marino, vive con la misma en el Valle, de quien se afirma que no puede trabajar ya que lleva muchos años enfermo de la columna y mentalmente tiene una discapacidad, lo cual no pudo ser constatado porque no se aportó historia clínica.

Y en cuanto a los gastos del hogar de la actora, en la investigación la pretensora adujo que los mismos eran de \$2.150.000, de los cuales el causante, aportaba \$700.000, Diego le daba \$200.000, que con la producción de la finca sacaba \$400.000, más \$150.000, que recibía su esposo por familias en acción, valores que suman \$1.450.0000, sin lograr explicar de dónde obtenía los otros \$700.000 pesos restantes, afirmando que sus hijos le daban el dinero por medio de giros en Servientrega que tampoco acreditó.

En este contexto lo plasmado en la investigación administrativa ordenada por Positiva S.A., no coincide con lo declarado por las testigos allegadas a la audiencia, en cuanto a la forma en la que el causante le hacía llegar el aporte a

su madre, ya que mientras en la investigación la demandante adujo que su hijo le enviaba el dinero por medio de Servientrega, las deponentes afirmaron que era el mismo afiliado, quien le llevaba el dinero a su madre cada 20 días, igualmente no coincide el monto del aporte del causante afirmado por la gestora del proceso de \$700.000, con el aducido por su hijo Diego de \$400.000.

De ahí que analizada la prueba en su conjunto no es posible establecer la dependencia económica parcial, que exige el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

Aclara la Sala, que la existencia del aporte del otro hijo de la accionante, la titularidad de los predios y los eventuales ingresos derivados de la siembra de maíz, frijol y otros, en principio, no desvirtuaría per se la dependencia económica parcial exigida por el legislador, sino fuera porque la prueba allegada por la demandante no da la información que se requiere para determinar la existencia real del aporte del hijo y el carácter subordinante del mismo, respecto a los demás ingresos.

Debe señalarse que la dependencia económica, supone un criterio de necesidad, esto es, de sometimiento o sujeción al auxilio recibido por parte del causante, de manera que el mismo se convierta en imprescindible para asegurar la subsistencia y si bien, en principio, no es requisito sine qua non, determinar el monto del aporte, ello resulta necesario cuando, como en este caso, además del aporte del causante, se reciben otros ingresos propios y de terceros.

De manera que, aunque para la Sala quedó acreditada la capacidad del causante quien percibía ingresos derivados de la pensión a cargo de la Policía Nacional y salario como trabajador dependiente, no está demostrado cuales eran sus gastos ni que tuviera a su cargo el sostenimiento económico parcial de su madre.

Respecto al status de pensionado del causante que fue objeto de prueba de oficio, en el proceso, cabe hacer dos precisiones, en primer lugar, que si bien el Cremil certifica que el señor Oliver Mayor Forero, no es titular de asignación de retiro o beneficiario de sustitución pensional a cargo de esa entidad, ver documento *36 Respuesta Cremil.pdf folios 2 a 3* del plenario, es claro que para la fecha de la certificación 7 de julio de 2021, no podía aparecer activo, dado que debió producirse su retiro del sistema en la fecha de su fallecimiento en el año 2014, y, en segundo lugar, que si bien la accionante afirma en la investigación administrativa que instauró acción judicial pretendiendo la sustitución pensional, lo cual se ratifica en el sistema de consulta de procesos judiciales, proceso que se adelanta bajo el radicado 05001333300120210003800, que cursa ante el Juzgado Primero Administrativo de Oralidad, ello no impide resolver la pretensión formulada en este trámite, dado que la sustitución de la pensión a cargo de la Policía y la pensión de sobrevivencia de origen profesional reclamada en este proceso no resultan incompatibles por amparar distintos riesgos.

Finalmente, la apoderada de la actora centró su disenso con el fallo en que la demandante es una persona mayor y debe tener un auxilio económico por parte de la ARL, considerando que el hecho que la misma tenga una finca de cuatro hectáreas, no la hace autosuficiente, debido a las innumerables dificultades que atraviesa el campo colombiano, frente a lo cual puntualiza la Sala, que aun tomando como cierta la anterior afirmación, la necesidad de la prestación no es un criterio legal para el otorgamiento de la prestación, pues la finalidad de la misma es que el sistema supla el desamparo generado por la supresión del aporte del causante, razón por la cual si no se establece la existencia de un aporte cierto, permanente y subordinante no es posible el reconocimiento de la pensión.

Por todas estas razones, la providencia de primera instancia debe ser CONFIRMADA

Costas en esta instancia a cargo de la demandante, se fijan como agencias en derecho la suma de \$1.000.000.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **CONFIRMA** la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, el 20 de abril del 2022, en el proceso ordinario instaurado por la señora ROSA ELENA FORERO DE MAYOR en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., proceso al cual fue citado como LITISCONSORTE NECESARIO POR PASIVA POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y como INTERVINIENTE AD EXCLUDENDUM la joven VIVIANA ALEXANDRA MAYOR RODRÍGUEZ.

2.- Costas en esta instancia a cargo de la demandante, se fijan como agencias en derecho la suma de \$1.000.000.


3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,



SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE



JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO